

Argentina

EL COSTO DE LA DEMOCRACIA

William Castillo

Argentina ha sido por estos días asunto de particular importancia dentro del contexto latinoamericano. Como ha quedado claro, los actos de rebeldía que encabezaron los oficiales Ernesto Barreiro y Aldo Rico en Córdoba y Campo de Mayo respectivamente, no fueron simples demostraciones de indisciplina e intransigencia individual de militares acusados por la justicia. Por el contrario, la peor crisis política que ha enfrentado la nueva Argentina democrática, puso de manifiesto la tensa situación generada a raíz del incremento de las citaciones judiciales a más de 400 oficiales aparentemente involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la "guerra sucia". Pero también se ha replanteado, como horizonte general, el eterno tema de la influencia militar en el marco democrático o, lo que es su contrapartida, la siempre relativa estabilidad de las democracias latinoamericanas. Y, como hechos intermedios, se han puesto en el tapete las presiones a que viene siendo sometida la justicia argentina, la estrategia de Alfonsín para anular el intento de insubordinación, la misma división en el seno de las Fuerzas Armadas, el papel del pueblo en la calle como garantía del nuevo orden y, finalmente, por supuesto, las posibles consecuencias y perspectivas que han abierto los recientes sucesos y cuya materialización ya empieza a conocerse.

De esta compleja situación, pero sobre todo de los horizontes que plantea, pueden decirse muchas cosas. En primer lugar, se ha demostrado que los sucesos de Córdoba y Campo de Mayo constituyeron, de alguna manera, una suerte de capítulo decisivo dentro de la campaña de presión contra la justicia argentina, y cuyos antecedentes habían sido las manifestaciones de las esposas de los militares en Plaza de Mayo, las misas en honor a los "héroes de la patria" organizadas por instituciones de derecha, las despedidas gloriosas dadas por ejemplo, al capitán Pedernera cuando fue llamado a declarar en Comodoro Rivadavia, las placas a los militares, las "volanteadas" frente a la Casa Rosada reivin-

dicando la "guerra santa" y, más que eso, las bombas de trotyl colocadas en casas de jueces encargados de los juicios. La presión militar tenía pues sus referentes, no menos dramáticos aunque ciertamente menos significativos, pero su objetivo siempre se vio claro: lograr una amnistía inmediata y total para los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Por eso, Córdoba y Campo de Mayo sólo sorprendieron a un contexto latinoamericano siempre demasiado abstracto. Ya el 24 de marzo un grupo de oficiales había publicado un documento en el que reivindicaba su actuación durante "El Proceso" y rechazaban las acusaciones, mientras que criticaban duramente la actuación de la cúpula militar que no había sabido "defender la institución". Tres días después un periódico de derecha insinuaba los supuestos planes del gobierno en caso de que "se produzca una situación de rebeldía de algún oficial" al ser llamado a declarar. Por esa misma fecha, Alfonsín fustigaba desde un pequeño poblado de Córdoba a "los nazis de siempre" por intentar minar las bases de la democracia. Nadie, pues, ignoraba lo que vendría, pero el panorama empeoraría con la visita del Papa, tras la cual resurgieron los argumentos religiosos de los militares (el "demonio Alfonsín", decía un anónimo distribuido en Buenos Aires) para justificar su postura. Todo estaba servido.

A partir de su génesis ¿cuáles son entonces las consecuencias más importantes de lo ocurrido en Argentina? Obviamente, Alfonsín y el pueblo argentino han conseguido fortalecer a una democracia ya demasiado acostumbrada a los cuartelazos; pero esta ganancia tiene su costo inmediato. Y ese "costo de negociación" que Alfonsín asumió al ir a Campo de Mayo personalmente y que concluyó con la rendición de los rebeldes, empieza ya a manifestarse. La purga en las cúpulas militares, la salida de Ríos Ereñú y Fichera, piezas claves en las exigencias de los alzados, demuestra que la división al interior de las Fuerzas Armadas puede llevar a una situación en

la que, bajo la amenaza del golpe, un sector trate, y con éxito, de imponer sus criterios. Por otra parte, comienza ahora el momento definitivo para la Corte Suprema, quien debe decidir sobre la posibilidad de unificar las causas para hacer valer el argumento militar de "la obediencia debida" la excusa justificatoria de los atropellos cometidos durante la "guerra sucia". Pero la Corte ha dicho que eso es imposible, por lo cual, seguramente, el costo político de esa decisión tenga que asumirlo el gobierno en una larga y candente discusión parlamentaria.

El fortalecimiento de la democracia ha tenido pues en esa visión estratégica que asumir el riesgo de mediar en el proceso judicial, tras lo cual es muy posible que muchos militares acusados salgan absueltos mientras que se reduzcan las penas para otros y, en fin de cuentas, la aplicación de la justicia se diluya en largos procesos. Es verdad que ahora ha disminuido en términos políticos el peso de los militares en la sociedad argentina, es verdad que la gente no almacenó velas y comida y no llenó las bañeras de agua ni se encerró en sus casas como hace once años. Es verdad que el pueblo salió a la calle y respaldó al nuevo proceso. Pero el peligro en los cuarteles no ha desaparecido. El reto, un reto peligroso, es entonces luchar por la aplicación de una justicia que Alfonsín aparentemente se vio forzado a negociar sin que reaparezca el temor a los sables.

¿Será posible?

